

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 187

FECHA: 17 de Febrero de 2014

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
COLOMBIA	LOS NEGOCIOS EN EL EJÉRCITO	2
CHILE	CACERÍA CONTRA MAPUCHES DESARMADOS POR LAS CALLES DE TEMUKO	3
EL SALVADOR	LA SUERTE ESTÁ ECHADA	4
GUATEMALA	“MIENTRAS NO SE NACIONALICE, NO PAGAMOS LA ENERGÍA ELÉCTRICA”	5
HAITÍ	EL REGRESO DEL DUVALIERISMO EN HAITÍ, BAJO EL MANTO DE "LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"	9
HONDURAS	HONDURAS, BAJO LA DICTADURA DEL CARTEL ESTADOUNIDENSE DE LA DROGA	12
MÉXICO	INFIERNO EN CHIAPAS PARA L@S MIGRANTES	14
NICARAGUA	COSEP SE RETIRA DE NEGOCIACIÓN	15
PANAMÁ	LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN Y LA SOLUCIÓN	16
PUERTO RICO	CRISIS DE ENDEUDAMIENTO CON SABOR CARIBEÑO	17
	EL IMPERIALISMO APRIETA LAS TUERCAS	18
VENEZUELA	LA LEY ORGÁNICA DE PRECIO JUSTO EN VENEZUELA. EL ANÁLISIS DE JAMES PETRAS	20
	A VUELTAS CON EL GOLPISMO EN VENEZUELA	20

COLOMBIA

LOS NEGOCIOS EN EL EJÉRCITO

SEMANA obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. En las conversaciones, que se desarrollan en los años 2012 y 2013, se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50 por ciento.

En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados 'a dedo'. También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del Ejército. En todos los contratos que aparecen en las grabaciones, el común denominador son millonarias 'tajadas' que se reparten en varias manos. Algunos de los beneficiados de esos contratos –que serían avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13.

Uno de los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta red de corrupción es el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo tristemente célebre el año pasado cuando Noticias Uno reveló unas conversaciones que no lo dejaban bien parado, entre él y el destituido magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga.

En los audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de cuadrar los contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos presos por falsos positivos con el fin de mantener su silencio. Las conversaciones demostrarían que parte del dinero de los contratos se queda en manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a los bolsillos de coronel González del Río y otros detenidos de diferente rango. No menos sorprendentes resultan algunas conversaciones en donde, desde la prisión militar colombiana, se habla de realizar negocios con generales del Ministerio de Defensa de Ecuador o contratistas venezolanos con fines non sanctos.

La red de corrupción no se limita a los grandes contratos. También les saca grandes comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las guarniciones militares para su funcionamiento. Con el aval de los comandantes de unas diez unidades, una gran parte del presupuesto para la gasolina de los vehículos militares se desvía, e incluso se consigna en las cuentas personales de varios oficiales presos. Tiquetes aéreos destinados para el uso del personal militar en varios batallones también son desviados para que sean utilizados por los abogados de los detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta los vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e instalaciones militares para los defensores de los detenidos se utilizan de manera irregular.

En 2011 y 2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban algunos de los detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel de Tolemaida y la PM 13. En las dos oportunidades los militares anunciaron investigaciones, sanciones y correctivos. En estos audios, queda claro que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a niveles escandalosos.

Pese a estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que presentó como guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González era uno de los ejes del tinglado. Además de ser una de las piezas clave de esta red, contaba con dos soldados activos que estaban a su disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar detenido. El tema era tan descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del penal, ya que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un penthouse para comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro oficial con toda su familia a pasar tres semanas de 'vacaciones' en diciembre de 2012.

Estar detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un impedimento para conversar con uno de sus subalternos que le ofrece fusiles para vender o tramitar la compra de pistolas. Lo que no deja de sorprender es que generales, comenzando por el actual comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, conversan amistosamente por teléfono con el detenido coronel González del Río. No son pocos los favores que estos y otros altos oficiales le hicieron al sindicado

coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le recomienda “no dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse como una mafia para denunciarlos (con los demás presos).

Las conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances insospechados. El coronel menciona como intermediarios y ‘padrinos’ a casi una docena de generales. Si bien algunos podrían argumentar que se trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores para conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora. No menos comprometedor es la situación de un numeroso grupo de tenientes coroneles y coroneles que conscientemente se prestan para saquear las arcas de sus batallones y unidades, como queda consignado en las grabaciones.

Lo más inquietante es quizá que lo que hace González, y está documentado en horas de grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es la muestra de una práctica mucho más generalizada, que involucraría a otros altos mandos presos detenidos en cárceles militares, principalmente la PM 13, pero que termina con ramificaciones que se extienden a altos oficiales del Ejército. El asunto no es desconocido, pues algunas de las investigaciones por casos de corrupción no han avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en expedientes de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría.

Estas grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido, dejan varios temas sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los actos de corrupción de un grupo de personas y otra muy distinta el respeto a la institución militar. Lo que queda claro con la revelación de estos audios es que los primeros damnificados por estos hechos irregulares son los soldados rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus equipos de campaña, la gasolina de sus vehículos, los repuestos de los helicópteros –y la seguridad aérea de los mismos–. Así mismo, cientos de miles de soldados y la imagen de un Ejército que ha librado batallas históricas en favor de los colombianos.

Lo segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y legitimidad de la institución del Ejército es castigar drásticamente los abusos y la corrupción. Con el creciente aumento del presupuesto de defensa es esencial que se redoblen los controles y la transparencia en su ejecución. La sociedad necesita de estar tranquila que sus impuestos se están invirtiendo correctamente en modernizar y profesionalizar sus Fuerzas Militares. Por esta razón es esencial que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes están involucrados en esta sofisticada red de corrupción y qué tan sistémica es en el interior del Ejército.

Revista “Semana” - Colombia

CHILE

CACERÍA CONTRA MAPUCHES DESARMADOS POR LAS CALLES DE TEMUKO

Con el inicio de juicio estatal en contra del machi Celestino Córdova y el apoyo de comunidades que buscan el ejercicio de los derechos mapuche, el día 3 de febrero de 2014, la policía militar chilena realiza una verdadera cacería contra mapuche desarmados por las calles de Temuko, entre los cuales se encontraban muchas mujeres y niños. Uno de ellos, Weliwen, de 2,5 años de edad debió observar como la policía efectuaba una brutal golpiza en la cabeza y cuerpo a su padre Alberto Pascual Curamil –werken de la ATM- que se encontraba caído en la vereda producto de la arremetida uniformada.. Cerca de las 12 horas, Weliwen junto a su hermano Moisés de 5 años de edad quedaron solos en la calle de una ciudad que desconocen luego de la detención hasta que otros mapuche les acogieron y condujeron hasta su madre a unos cien kilómetros de Temuco.. El lugar de detención de Curamil era desconocido hasta las 18 horas de ese día cuando fue derivado desde el hospital a constatar lesiones. Junto al werken Curamil fueron detenidos otros 17 mapuches. Una de las menores de edad detenida es la machil (machi en iniciación) del territorio lafkenche Wanglen Painequeo que es secuestrada por la policía junto a varios menores de edad.

Así ha relatado el vocero mapuche lo vivido y su interpretación de los atropellos que vive su pueblo. “Cuando me suben al carro policial fui tan fuertemente golpeado en todo mi cuerpo que no recuerdo todo, perdí la conciencia, alcé un grito desesperado –recuerdo- para poder vomitar toda la sangre que me estaba ahogando ... estaba esposado y boca abajo, luego recuerdo a un paco (Carabinero) que se sentó sobre mi y no sé por cuántos minutos golpeó mi cara con su mano empuñada y después ya no recuerdo nada hasta llegar al cuartel policial donde no podía sostenerme en pie ... me obligaron a aceptar bañarme con mi ropa y cuerpo ensangrentado con una manguera a presión ante lo cual me negué ... como 5 horas después me llevan recién al hospital de Temuco para constatar lesiones. Para mí, y según entiendo también para las convenciones internacionales, yo fui torturado por agentes del Estado, no sólo por los golpes sino por las agresiones verbales sobre mi condición de mapuche y contra mi familia y mis hijos. Creo que hay un seguimiento incluso a mis hijos, donde el menor tiene apenas 3 años.... Espero el apoyo de los expertos sobre el tema, pero creo que no se puede dejar pasar por alto”.

El werken concluye su relato acusando a los sucesivos gobiernos y su rol en la destrucción permanente a su pueblo “entiendo que este gobierno derechista termine su mandato con torturas y persecuciones porque ellos actúan así, son herederos de la dictadura de Pinochet, trabajaron allí especialmente los latifundistas ultraderechistas de esta región... y todos los que hoy trabajan con ellos son cómplices del maltrato a mi pueblo. Pero la pauta para esa actuación la entregaron los gobiernos anteriores, la concertación que ahora se presenta como “mayoría”. Yo les preguntaría algunas cosas como por ejemplo ¿aprendió la lección de lo que significa ser los responsable de ejecuciones de mapuche? ¿Aparecerán ahora con los títeres de siempre “dialogando” para someter a través de alguna “consulta” fraudulenta? ¿cuándo presentarán un plan detallado de retiro de las forestales, de las centrales de paso de nuestros ríos, de las concesiones mineras, de la devolución de nuestras aguas, de ocupación de nuestro mar y de devolución de nuestro territorio histórico? ¿Liberará inmediata e incondicionalmente a nuestros prisioneros políticos e indemnizará a las víctimas mapuche del maltrato estatal?. Son los puntos que todo mapuche que lucha por los derechos de su pueblo y sufre las consecuencias de aquello, debiera tener en cuenta antes que todo. Porque en nada se puede creer excepto en mantener nuestra voluntad de continuar luchando por aquellos derechos, aún sabiendo las consecuencias.

Los representantes de la ATM, han indicado que presentarán las acciones legales que correspondan ante los tribunales chilenos frente a esta nueva flagrante violación a los derechos humanos, para lo cual esperan el apoyo y la solidaridad nacional e internacional dada las dificultades que dichas acciones implican.

Fuente: Alianza Territorial Mapuche. Rebelion

EL SALVADOR

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Culminó el escrutinio final de las elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero en El Salvador. El FMLN resultó el rotundo ganador con 1.315.768 votos, equivalente al 48.93% de los votos válidos; el partido ARENA sólo alcanzó 1,047,592 votos (38.96%), que constituye su votación más baja de las últimas 3 elecciones; UNIDAD, una agrupación de partidos de derecha encabezada por su candidato Antonio Saca, ex presidente de la República y ex miembro de ARENA del cual fue expulsado, obtuvo el tercer lugar con 307,603 votos (11,44 %).

El partido FMLN con los votos obtenidos a su favor ha cambiado el mapa político de El Salvador, ganó en 13 de los 14 departamentos y en 185 municipios de un total de 262. Departamentos y municipios, del oriente, occidente y centro del país que anteriormente daban sus votos mayoritariamente por ARENA, ahora dieron sus votos por el partido de izquierda. Los programas sociales impulsados por el gobierno de apoyo a la educación, agricultura, salud, juventud y adultos mayores; mantenimiento y sectorización de subsidios en servicios fundamentales como el suministro del gas licuado, se traducen en respaldo al partido en el gobierno por amplios sectores de población.

Al conocerse el resultado inicial que ya era definitivo el propio día de las elecciones, la dirección de ARENA, encabezada por su candidato presidencial Norman Quijano convocó a una “celebración” en la que apenas participaron un par de centenas de correligionarios, pretendiendo darse ánimos a través de los medios informativos mayoritarios que les son afines y con ello a su militancia y votantes, ante una contundente derrota equivalente a 10 puntos porcentuales del total de los votos emitidos.

El próximo 9 de marzo se efectuará la segunda vuelta pues ninguno de los contendientes alcanzó el mínimo exigido por la ley electoral, equivalente al 50% más un voto.

ARENA, partido representante de la reancia oligarquía, heredera de los “escuadrones de la muerte” cuyos dirigentes y correligionarios se aprovecharon del Estado durante 20 años de gobiernos corruptos para favorecer sus propios intereses, hablaron en esta campaña de “recuperar” El Salvador para seguir usufructuándolo. Su llamado no les dio el efecto deseado. La mayoría de población ya no cree en ese partido excluyente, torpe y amenazador, anclado en el pasado que sigue demandando en su himno que el país sea la tumba de sus principales “rojos” adversarios. El actual presidente de la República, Mauricio Funes, lo ha calificado recientemente con mucho tino, como un partido decadente.

El FMLN llegará a esta segunda vuelta no confiado, sí con mucha determinación de triunfo estimulado por los resultados, con nuevos bríos y seguramente nuevas alianzas que ya se empiezan a vislumbrar en el horizonte político salvadoreño. Importantes dirigentes del partido GANA, escisión de ARENA y principal componente de UNIDAD ya anunciaron que no efectuarán ningún tipo de acuerdo con ARENA, partido de cuyos dirigentes recibieron amenazas, insultos y acusaciones de traidores y corruptos. Un posible entendimiento se perfila entre GANA y el FMLN, aunque eso no representa que los que votaron por UNIDAD automáticamente trasladen sus votos al partido de izquierda. Tampoco se aprecia como un pacto indispensable para la consecución del triunfo efemelenista el próximo 9 de marzo.

ARENA para ganar necesitaría remontar una desventaja de alrededor de 270 mil votos, lo que se aprecia prácticamente imposible. Como se dice comúnmente, la suerte está echada, aunque aquí no se trata de suerte sino de las vivencias, apreciaciones y respuestas de la población a partir de los logros obtenidos por un gobierno que ha hecho la mayor inversión social en la historia del país en condiciones muy adversas, en beneficio de los más desprotegidos y que mantiene la voluntad y el legítimo derecho de continuar con esos cambios y profundizarlos.

Fuente: Raúl Francisco Leiva Jiménez. Rebelión

GUATEMALA

“MIENTRAS NO SE NACIONALICE, NO PAGAMOS LA ENERGÍA ELÉCTRICA”

“No es que no queremos pagar la luz. Ya no podemos pagar. Últimamente las facturas venían con cobros hasta de 5 mil y 10 mil quetzales. Por eso decidimos desconectarnos de la empresa y conectarnos directamente hasta que se nacionalice la luz (...)”, indica don Eusebio García, abuelo maya campesino en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica, en Jalapa, Guatemala.

Si hasta hace algunos años atrás, el manipular un medidor (contador) domiciliario de la energía eléctrica era casi un pecado capital. Un verdadero atentado autocensurado contra la propiedad privada (de la empresa distribuidora de energía). Ahora, aquel miedo es sólo un recuerdo para los cientos de comunidades en resistencia en la Guatemala empobrecida. Un país en el que el 75% de sus habitantes aún cocina con leña sus alimentos, según el Ministerio de Energía y Minas, 2013.

La privatización de la distribución de la energía eléctrica, y el subsiguiente encarecimiento exacerbado del kilovatio hora de electricidad, sin mejoras en el servicio, terminó liquidando la paciencia casi estoica de indígenas mayas (a quienes la energía eléctrica los empobreció aún más).

Según el Banco Mundial, para el 2010, el 20% de guatemaltecos no tenía acceso a la energía eléctrica.

Un método inédito de resistencia popular contra el despojo neoliberal

Amparados en el artículo 44° de la Constitución Política de Guatemala que establecen la preeminencia del interés colectivo sobre el interés privado, y del artículo 45° de la misma Ley que dispone el derecho a la resistencia popular ante la violación de derechos, centenares de comunidades indígenas campesinas se mantienen desconectados de los medidores de la empresa distribuidora de energía, y conectados de manera directa al sistema de electricidad. La consigna es contundente: “Mientras no se nacionalice la energía eléctrica, no pagaremos la luz”.

Para tomar esta medida límite, las comunidades se auto convocan a asambleas comunales, y eligen su junta directiva local. Levantan un acta indicando que se declaran en resistencia. Luego, proceden a cortar los cables de los medidores de energía y conectan la electricidad a las viviendas de manera directa. Colocan sus mantas (letreros) en los ingresos a las comunidades advirtiendo el rechazo público a la empresa privada de electricidad.

Esta resistencia en Guatemala comenzó en el Departamento de San Marcos, a inicios de la década pasada. Pero, tomó fuerza inédita en la Costa Sur de Guatemala (2008) cuando las comunidades organizadas en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) obligaron a su dirigencia a extender la lucha a todo el territorio nacional.

Ahora, fácilmente las comunidades en resistencia superan los mil. Presentes en más de 100 municipios del país, y en 20, de los 22 departamentos. En las comunidades en resistencia no todas las familias se desconectan. Pero, la lucha, en la medida que pasa el tiempo, se masifica y amenaza en convertirse en un punto de inflexión para la triste historia neoliberal de Guatemala.

El Estado produce la electricidad, pero empresas extranjeras la comercializan

El 100% de la energía eléctrica que se consume en Guatemala lo provee el Estado de Guatemala, mediante el Instituto Nacional de Electricidad (INDE). Cerca del 80% de energía eléctrica lo produce el Estado (el 20% restante lo compra a las privadas). Más del 50% de esta energía es de matriz hídrica.

Hasta antes de la persistente y dolorosa oscuridad neoliberal, INDE era el único distribuidor de la electricidad en el país. Pero, la fiebre neoliberal hizo que corporaciones extranjeras se apropiasen de este jugoso negocio, cuyas ganancias millonarias jamás sabrá con exactitud el pueblo guatemalteco.

En la actualidad, la empresa ENERGUATE (parte de la corporación inglesa ACTIS) monopoliza la distribución de la energía eléctrica en 19 departamentos del país. Y la Empresa Pública de Medellín (EPM), en los tres restantes.

Según el Sindicato de Trabajadores del INDE, esta empresa pública vende a las empresas distribuidoras de electricidad a 0.66 quetzales el kilovatio hora de energía. Y, éstas cobran al consumidor a 1.89 quetzales (0.23 dólares) el mismo kilovatio hora. Cobran por alumbrado público hasta 100 quetzales mensuales en comunidades donde ni existe dicho servicio. Las empresas distribuidoras ganan nada menos que 1.23 quetzales (0.15 dólares) por kilovatio hora de electricidad que consume cada guatemalteco (CODECA, 2013).

Estas empresas concesionarias de la distribución de electricidad en Guatemala no hicieron mayores mejoras para ampliar el servicio de energía eléctrica. Rentabilizan el cableado eléctrico e infraestructura instalados por INDE antes de la privatización. Es más, el empobrecido Estado de Guatemala transfiere anualmente cerca de 1,600 millones de quetzales (200 millones de dólares) a las empresas concesionarias de distribución de energía por concepto de subvención por tarifa social (para usuarios que consumen hasta 100 kilovatio mes), pero este aporte, lejos de ir a la ampliación o mejora de los servicios, al parecer ingresa como parte de las utilidades de las empresas distribuidoras.

Argumentos para la renacionalización de la distribución de la energía eléctrica

El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental establecido en la Resolución N° 65/151 de la ONU, en el 2010. Así mismo, las Naciones Unidas, en su Resolución N° 1803, de 1962, estableció que los estados, en legítimo ejercicio de su soberanía, pueden nacionalizar sus recursos naturales y riquezas privatizados. Ambas resoluciones fueron ratificadas por el Estado de Guatemala.

El artículo 44° de la Constitución Política de Guatemala establece que el interés colectivo prevalece sobre el interés particular. Es decir, no se puede condenar a la oscuridad y a mayor empobrecimiento a las grandes mayorías que ya soportan el costo del sistema neoliberal en aras de preservar “la seguridad jurídica” del lucro de las empresas distribuidoras de electricidad. El Estado tiene que ejercer su rol de garante de derechos fundamentales.

El Artículo 55° de la Ley General de Electricidad (1996) es claro al establecer que el Estado debe rescindir el contrato de concesión con las empresas particulares de energía eléctrica cuando éstos presten pésimo servicio. En los hechos, las empresas distribuidoras de energía en Guatemala no sólo prestan pésimo servicio, sino que las exageradas facturaciones, y los incalculables daños causados a los usuarios por los permanentes apagones, son abusos que cualquier Estado medianamente serio debería ya haber sancionado con multas.

Hasta antes de la privatización de este servicio (1996), en el área rural, las familias promedio pagaban entre 20 y 30 quetzales mes por consumo de energía (de 3 a 4 dólares). Ahora, las facturas mensuales promedio en el campo fluctúan entre 300 a 1,500 quetzales (de 40 a 180 dólares). En las comunidades indígenas, se ven facturas acumuladas de luz hasta por un monto total de 15 mil a 20 quetzales.

Económicamente la nacionalización y municipalización del servicio de la distribución de la energía eléctrica es lo mejor que podría hacer el deficitario Estado de Guatemala. Es un negocio formidable y asegurado. Incluso bajando el precio del kilovatio hora al consumidor, la entidad pública siempre terminaría con ganancias económicas aseguradas. Sería importante prestarle atención a los exitosos casos de las municipalizaciones de la electricidad en Alemania, Canadá, Colombia, etc. ¿O será que los gobernantes cuidan intereses ajenos? Si para 1996, según estimaciones de la FAO, el servicio de energía eléctrica sólo cubría el 42% del territorio nacional, con casi dos décadas de privatización de este servicio el paisaje oscuro sigue siendo igual o peor en de Guatemala.

Cuando el usurpador despoja al pueblo, denominan inversión; cuando el pueblo reclama lo suyo, denominan delito

Ante la masificación incontenible de la desconexión de los medidores, la empresa ENERGUATE ensaya diferentes métodos para intimidar a usuarios en resistencia:

Persecución penal contra dirigentes. Contrata bufete de abogados (de renombre) para acusar penalmente a dirigentes de las comunidades en resistencia, por robo de energía, ante los tribunales de justicia. En algunos casos logró encarcelar a algunos, pero las comunidades lograron sacarlos. Distribuye cartas pre jurídicas intimidando a usuarios en resistencia a que paguen su “deuda”.

Difamación pública a las comunidades en resistencia. Contrata espacios en los medios radiales e impresos para desprestigiar y acusar a las comunidades en resistencia de “ladrones de energía”, “organizaciones falsas”, etc. Incluso sacerdotes católicos y pastores evangélicos repiten estas acusaciones en sus homilías y prédicas, calificando de “anticristos” y “pecadores” a cuantos se encuentran en resistencia. En alguna Parroquia el cura llega incluso a advertir que “no habrá bautizo sino presentan factura de luz cancelada”, según denuncian activistas de CODECA.

Difamación a las agencias de cooperación internacional. Con la finalidad de aislar internacionalmente a CODECA, ENERGUATE no sólo difama a este movimiento social en resistencia, sino también acusa, en las redes sociales, a agencias de cooperación solidarias con CODECA de promover y financiar a organizaciones ilegales.

Genera apagones y confrontación entre comunarios. Para presionar a las comunidades, ENERGUATE ocasiona apagones permanentes con la finalidad de que los usuarios que no están en

resistencia se exacerben y “culpabilicen a usuarios en resistencia” de las deficiencias crecientes del servicio de energía.

Muchos consejos comunitarios de desarrollo (COCODE), gobiernos municipales, e incluso el Presidente Otto Pérez y sus ministros cierran filas en defensa de ENERGUATE, y acusan a las comunidades en resistencia de “ladrones de luz”. El Viceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en una reunión con organizaciones campesinas, hace unos días atrás, sentenció: “No habrá ninguna donación de fertilizantes para campesinos afiliados a CODECA por que se portan muy mal”.

De esta manera, esta legítima demanda impulsada por indígenas campesinos empobrecidos se convierte en una lucha desigual. Donde estructuras del Estado, sectores de las jerarquías de las iglesias, y los medios empresariales de información, junto a las empresas extranjeras, cierran filas para defender el despojo neoliberal, y atacar a las organizaciones campesinas en resistencia. Los ciudadanos, clase media, centros de investigación, ONGs y universidades, aún guardan silencio complaciente.

Por qué en otros países el servicio de la energía eléctrica es controlado por los estados

En Noruega, el 85% de la energía eléctrica es generada por los municipios. En Escandinavia, la distribución de la energía eléctrica está principalmente controlada por empresas municipales.

En Francia, la empresa pública de Electricité de France (EDF), dedicada a la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, es de propiedad pública en un 85%.

En Alemania, el Municipio de Hamburgo, fue el último en recuperar el control del servicio de energía eléctrica (22/11/13). En este país, son 170 los municipios que controlan los servicios de agua, gas y energía eléctrica.

La corporación de energía eléctrica Vattenfall de Suecia, y la corporación de electricidad IVO de Finlandia, ambas de propiedad estatal, no sólo prestan servicios en sus respectivos países, sino en diferentes países del mundo. Y son empresas estatales altamente competitivas.

En Quebec, Canadá, el 100% de las acciones de la empresa eléctrica Hydro Quebec es de propiedad del gobierno de Quebec.

En Medellín, Colombia, la Empresa Pública de Medellín (EPM), de propiedad del Municipio de Medellín, no sólo abastece del servicio de energía eléctrica a Medellín y otras ciudades de Colombia (19% del consumo de electricidad), sino también, desde 1998, tiene presencia significativa en el rubro de energía eléctrica en Guatemala. Esta empresa municipal colombiana, sólo con la distribución de electricidad que realiza en Guatemala (en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez), entre 2010 y 2013, alcanzó una ganancia de 245 millones de dólares. Y, aporta al gobierno municipal de Medellín con más del 50% del presupuesto del gobierno local.

Bolivia quizás sea el último país latinoamericano que renacionalizó el servicio de la distribución de la energía eléctrica en años recientes por abusos permanentes y los costos arbitrarios que la empresa española IBERDROLA imponía a usuarios bolivianos. En España y en Argentina, el debate de la nacionalización de la energía eléctrica está en la agenda pública. Pero, en Guatemala, intelectuales y políticos aún guardan silencio sobre esta demanda que el pueblo organizado en resistencia ha colocado en la agenda nacional desde las calles.

La renacionalización del servicio de la energía eléctrica en Guatemala es un asunto de derechos y de soberanía energética. ¿En qué cabeza cabe que un Estado (casi colapsado como Guatemala) produzca energía eléctrica para que empresas privadas lucren sin control con este servicio? Nadie sabe en Guatemala a cuántos miles de millones de dólares asciende las ganancias de ENERGUATE con este negocio, como tampoco se sabe a cuánto alcanza el monto de los permanentes daños ocasionados a usuarios por las empresas distribuidoras de electricidad.

Fuente: Ollantay Itzamná. Rebelión

HAITÍ

EL REGRESO DEL DUVALIERISMO EN HAITÍ, BAJO EL MANTO DE "LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

A pocos días de la conmemoración del terremoto del 12 de enero 2010, el año 2014 ya se anuncia en Haití, bajo el signo de una mortífera deflagración: el regreso a cara descubierta del duvalierismo en el poder del Estado con la participación desvergonzada, provocativa del nazista Jean Claude Duvalier -invitado por Michel Martelly- a las ceremonias oficiales del Día de la Independencia en las Gonaïves, el 1° de enero 2014.

Semejante provocación, en realidad una impostura y una amalgama, no parece todavía haber provocado inmediatamente una ola de indignación en Haití: la prensa local comentó el acontecimiento en un tono banal cuando no afable. De este modo la Agencia en línea HPN (Haití Press Network), desde Puerto Príncipe, titula el evento como sigue: "Independencia - Celebración - Martelly, Avril y Duvalier, tres presidentes para un mensaje de unidad".

El artículo de HPN es retomado por el sitio de la Radio Televisión Caraïbes, el 2 de enero 2014, bajo el título, ligeramente modificado "Gonaïves 1° de enero 2014: Martelly, Avril y Duvalier, tres presidentes por un mensaje de unidad".

Jean Claude Duvalier y Prosper Avril, nunca fueron electos presidentes. En un país como Haití donde reina la impunidad bajo todas sus alucinantes y sanguinolientas formas, estos textos de las agencias de prensa leídas por ciudadanos que se cree equivocadamente, descerebrados, no son anodinas, ver neutras... Pero para la verdad histórica, es necesario una vez más hacer notar un contradicho, una mentira y una amalgama.

Jean Claude Duvalier no fue nunca presidente de Haití, un presidente electo en una elección democrática. El heredó un poder absolutista, obscurantista; él ocupó la función presidencial gracias a una trampa, una violación de la Constitución que fue promulgada de manera ilegal por el sanguinario dictador Francois Duvalier, con el fin de transmitirle de manera hereditaria, la "presidencia vitalicia".

Entonces poner en un texto público, hacer creer o asumir que el dictador Jean Claude Duvalier ha sido presidente de Haití es una mortífera falsificación de la historia, una mentira, que no corresponde a la realidad de los hechos. De igual manera, escribir en un texto público, querer hacer creer o asumir que Prosper Avril- invitado también por Michel Martelly, a las ceremonias oficiales del Día de la Independencia en las Gonaïves, ha sido presidente es una deformación de la Historia, una mentira y una amalgama. El putchista Prosper Avril, iniciador y primer jefe histórico de los criminales "Zengledos" desde 1987, nunca fue presidente de Haití, elegido en elecciones democráticas. El ocupó ilegalmente la función presidencial como resultado de un golpe de estado contra su colega de las Fuerzas armadas de Haití (FAd'H), el criminal mercenario Henry Nanphy que había golpeado duramente al movimiento democrático, a la caída del pro nazi Jean Claude Duvalier en 1986.

La verdad histórica y la memoria popular notaron bien que el golpista Prosper Avril, tiene sus manos enormemente manchadas de sangre, fue uno de los cerebros y uno de los comandantes de la horrible masacre del 29 de noviembre de 1987, en el pasaje Vaillant, en Puerto Príncipe, masacre en la que la armada de Haití, flanqueada por sus celosos mercenarios "afectos", los escombros esparcidos de los VSN (voluntarios de la seguridad nacional, los *tonton macoutes*) puso brutalmente fin a las elecciones de 1987.

Otorgando la más calurosa hospitalidad a la impunidad, recordamos que este Martelly, cínico y condescendiente, con el fin de ultrajar a todas las víctimas, invitó recientemente a este mismo Prosper Avril, a conmemorar la masacre de la calle Vaillant en el Palacio Nacional, el 29 de noviembre del 2013, en compañía, lo que es peor, del inefable Gérard Gourgue.

El hecho de que Michel Martelly haya osado invitar a Jean Claude Duvalier -actualmente inculpado en la justicia haitiana por los crímenes contra la humanidad y dilapidación a gran escala de los fondos públicos-, así como el golpista Prosper Avril, expresa con claridad, la naturaleza profundamente néo-duvalierista del actual Ejecutivo. Conforta igualmente las convicciones personales de Michel Martelly, duvalierista desde su llegada a la edad adulta y admirador

incondicional del cuerpo de torturadores de los Leopardos, entidad especializada de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) organizadas por la CIA durante el reinado del nazi Jean Claude Duvalier, en el que Michel Martelly participó durante varios meses... La justicia deberá algún día establecer la veracidad de los hechos, alegados por el clamor público, en cuanto a la participación personal de Michel Martelly junto al criminal putchista Michel Francois en las masacres de la población civil en los asentamientos más pobres durante el sangriento golpe de estado de 1991...

El actual Ejecutivo neo-duvalierista Martelly-Lamothe, presentando ofensivamente "tres presidentes por un (mismo) mensaje de unidad", está haciendo entonces del 1° de enero 2014, fecha de la conmemoración de los 210 años de la independencia," una importante jornada colocada bajo el signo de la unidad" y de "la reconciliación nacional".

Hay allí, manifiestamente, una trampa, ultraje, falsificación de la Historia y manifestación de la impunidad que está, también, en el corazón de este poder anti-popular, lleno de escándalos, crímenes y de corrupción.

Reconciliación implica colocar al verdugo enfrente de la víctima En el idioma del Derecho, para que haya verdaderamente reconciliación, es necesario que haya 2 personas. El verdugo que reconoce sus crímenes, y la víctima a quien el Derecho y la moral, le acuerdan reconocimiento, justicia y reparación. No es este el caso actual en Haití. Los verdugos y los mercenarios criminalizados de la dictadura duvalierista (Jean Claude Duvalier, Prosper Avril, Michel Francois, Mme Max Adolphe, y todos los otros...) tienen vía libre, circulan libremente, gozan en toda impunidad de sus crímenes y de sus riquezas robadas a la nación haitiana.

Peor: la asociación de saltimbanquis del régimen Martelly-Lamothe, por las trampas del abogadito estafador Pierre-Richard Casimir, falsificador y denunciante de "kamoken" propulsado al cargo de "ministro" de Relaciones Exteriores, por los servicios prestados en un oscuro "affaire" de papeles falsos y otras bajezas, otorgó incluso un pasaporte falso al dictador depuesto.. Con los saltimbanquis Martelly-Lamothe, el nazi Jean Claude Duvalier dispone así de todos los privilegios, incluida una pensión, de la cual se benefician los antiguos jefes de estado, pagos por el tesoro público haitiano, el mismo que fue asaltado por la hermandad duvalierista. Y Jean Claude Duvalier, ultrajando con condescendencia a las víctimas de la dictadura duvalierista, se acordó el año pasado el "privilegio" " de ser el "padrino" (en el sentido siciliano y haitiano del término) de una promoción que se graduaba de la Escuela de Derecho de las Gonaïves...

Estas presencias en las ceremonias oficiales del 1° de enero 2014, constituyen un insulto a la memoria de nuestros ancestros, a la memoria de los Padres fundadores de la patria y de todos los sacrificados que regaron con su sangre por la conquista de la libertad.

Es igualmente un insulto a la memoria de todos los que han combatido el terror liberticida de los Duvalier. Por esta presencia en la tribuna oficial de la celebración del Día de la Independencia, Jean-Claude Duvalier, sus colegas torturadores así como sus soldaditos representados en las personas de Michel Martelly y de Laurent Lamothe, se mofan infinitamente de todos los sacrificados del sistema duvalierista, de los valores caros a la fundación de la patria: libertad, igualdad, y fraternidad.

¿Es necesario recordar que durante los 29 años de la dictadura duvalierista, el padre y el hijo buscaron transformar a todos los haitianos en esclavos duvalieristas, esclavos del pensamiento único a la instancia de los tonton macoutes y otros servidores celosos de la dictadura? ¿Que en esos 29 años, pensar la libertad, escribir la palabra Derecho e imaginar un país en donde todos los haitianos fueran iguales delante de la ley, eran todos actos pasibles de tortura, de exilio y de asesinato para miles de jóvenes que aspiraban a la libertad y a todos nuestros derechos ciudadanos?

En este marco analítico enfrente con la realidad observable, no es por casualidad que todas las esferas y aparatos del estado, los gabinetes ministeriales, estén infectados de tantos mercenarios duvalieristas reciclados llevando el brazalete rosado del Martellyismo; no es casualidad que tantos hijos e hijas de tontons macoutes conocidos y otras tonton macoutes mujeres (fiyet lalo) estén instalados, con su brazalete rosado, en los puestos dirigentes de las instituciones del Estado... El

más representativo de estos mercenarios incompetentes no es más que Nicolás Duvalier, hijo de Jean-Claude, colocado como "consejero político especial" del gabinete de Michel Martelly...

De esta manera Martelly y Lamothe, exhiben sin reservas su filiación duvalierista, seguros del apoyo indefectible de las grandes democracias "amigas" que no dudaron jamás en apoyar a los dictadores en países del Tercer Mundo, al servicio de los intereses de las altas finanzas occidentales.

Hoy, el proceso de Jean-Claude Duvalier se prolonga largamente, los tres jueces de la Corte de Apelaciones que instruyen su causa, hacen perdurar la danza macabra de la impunidad no llegando a ninguna decisión... A contra corriente de la subcultura de la amnesia y del silencio, más de 30 víctimas, luchadores han oficial y valientemente abierto un juicio contra Jean-Claude Duvalier por arresto arbitrario, secuestro, violencia psicológica y torturas: estas víctimas no han obtenido hasta hoy ni justicia ni reparación. Entonces, ¿cuál es el color y la orientación de la justicia hoy en Haití?

¿Será rosada "tèt kale" con el emblema la bandera negra y roja y la pintada de Francois Duvalier? El sistema judicial haitiano, largamente domado, avasallado y corrompido por la dictadura duvalierista y por los poderes del post 1986 ¿sabrán hacerle justicia, con toda independencia, a las víctimas del terror liberticida y cleptócrata de los Duvalier? El futuro lo dirá... Bajo el manto de la impunidad, y con la complicidad activa del actual Ejecutivo-duvalierista Martelly Lamothe, son los verdugos de ayer, invistiendo selectivamente con mirilla telescópica los comandos del poder político que quieren hoy, imponer una pretendida y hedionda "reconciliación", o una "amnistía-amnesia" por encima de sus crímenes impunes, ahora que las víctimas de la dictadura reclaman justicia.

Bajo el manto de la impunidad, se trata para los verdugos duvalieristas, de arrogarse una "auto-amnistía" e imponerla a la nación, sin ninguna consideración por las víctimas, negándoles una vez más, todos sus derechos ciudadanos, y más precisamente su derecho a la justicia y a la reparación.

Hay que decir fuerte y claro en todas las tribunas nacionales e internacionales: **las decenas de miles de víctimas de la dictadura duvalierista no han obtenido hasta ahora justicia ni reparación**, este derecho a la justicia y a la reparación que hubiera podido de manera legal y moral, justificar la apertura de un proceso de unidad en la reconciliación nacional. Es por lo tanto inmoral e ilegal predicar la "unidad de la familia haitiana" (eslogan de los duvalieristas reagrupados en el seno del mercenario y heteróclito PUN (Partido de la Unidad Nacional): es inconcebible e ilegal reclamar la reconciliación nacional por fuera de un proceso del accionar de la justicia y de los procesos que de ella se desprendan.

Más cerca de nosotros, de la América latina hermana que ha conocido su cuota de dictaduras sanguinarias similares a la de los Duvalier, podemos sacar muchas enseñanzas de la sociedad civil. El abogado Gilberte Deboisvieux, antiguo responsable de la América central en la Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH), explica la razón de esta ola de leyes de amnistía sobre el continente sud-americano en los siguientes términos:

¿"Porqué una ley de amnistía? No hay que engañarse, la mayoría de las veces, los nuevos gobiernos, mismo elegidos, salidos de grandes conflictos sangrientos, tienen lazos poderosos de intereses y parentesco con los dictadores, y los torturadores de ayer. Son de la misma categoría económica, el mismo origen social. Han frecuentado las mismas escuelas. Cuando es cuestión de reconciliación nacional, es de una reconciliación entre ellos y sus pares de lo que se trata."

En un parecido y riguroso eco, en un discurso pronunciado por Benjamin Cuellar, director del Instituto de los Derechos del Hombre de la Universidad Centroamericana (DIDHUCA) delante del Congreso de la Federación Latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos (FEDEFAM), que tuvo lugar en el otoño de 1995 en San Salvador, este especialista de los derechos del hombre declaraba, en el meollo de su intervención intitulada ¿"Amnesia o amnesias?", en el pasaje "Amnesia o conspiración del silencio" que "Todas las leyes de impunidad de nuestra América Latina se han caracterizado, en mayor o menor medida, por sus intentos de disimular los crímenes del terrorismo comandado por el Estado. Estas leyes han beneficiado automáticamente a los agentes del gobierno, que fueron dispensados de reconocer algún tipo de culpabilidad. Estas leyes han cubierto un dominio muy vasto y han servido para prohibir o suspender toda investigación, y por añadidura eliminan la posibilidad de acción civil individual o gubernamental

alguna. Así, según Louis Joinet "el poder de amnistía no se contenta con asegurar por ej. que los torturadores se beneficien de la impunidad criminal, sino que busca además organizar la conspiración del silencio que impide toda posibilidad para las víctimas de obtener las reparaciones materiales o mismo morales a las cuales ellas podrían aspirar según la ley común. El objetivo no es tanto evitar un castigo civil, ni el pago de indemnizaciones compensatorias, sino de suprimir la posibilidad de una investigación que pudiera conducir a un proceso civil público, lo que confirma una vez más que la publicidad es la sanción más temida por los autores de ataques serios contra la condición humana."

Y elaborando aún más su pensamiento analítico, Benjamin Cuellar precisaba en la misma intervención, y en el capítulo "Comprometerse por la verdad", que "Los métodos "fáciles" y "cómodos" para olvidar lo que los asesinos han tratado de hacernos aceptar, son inadecuados para detener la justa búsqueda de una justicia verdadera, fundada en la verdad. Los horrores no pueden ser pasados bajo silencio y los autores no deben ser protegidos por el anonimato, desinvertidos de toda responsabilidad, permaneciendo su participación desconocida: esto solo puede alcanzar para minar la esencia misma de una coexistencia social que respete verdaderamente la dignidad humana. En verdad, tenemos allí, sin ninguna duda un problema social que va más allá del dolor individual, y es como tal que debe ser encarado".

¿Qué concluir de esto? La lucha de la sociedad civil haitiana contra la impunidad y por la justicia, hoy, es un deber de memoria, un combate contra la amnesia programada, alimentada y banalizada en la totalidad del cuerpo social haitiano carnavalizado bajo el halo del martellysismo neo-duvalierista, en un país, con pérdidas de referencias ciudadanas y desestructurado. En la obligación de confrontar lo auténtico con lo falso, la razón al contrasentido, la sociedad civil haitiana debe llevar un desproporcionado combate, la lucha contra la impunidad adosada a una redefinición histórica de la ciudadanía haitiana que se inscribe a contra corriente del populismo de extrema derecha martellyana y contra el regreso planificado del duvalierismo en Haití, bajo el manto impune de la "reconciliación nacional". La sociedad civil debe hoy más que nunca, como nos lo enseña el célebre filósofo Stéphane Hessel, indignarse y movilizarse contra el funesto y criminal regreso al poder del duvalierismo en Haití...

...Desde Puerto Príncipe y en Facebook, el ciudadano Stephen William Phelps, el 2 de enero 2014, expresa corajuda y públicamente su indignación en estos términos: "Vuélvame loco o sabio... Es intolerable que Jean Claude Duvalier esté en esta tribuna oficial sin haber respondido por los actos horribles e inhumanos cometidos en este país a lo largo de su presidencia vitalicia. **¡No! ¡no! ¡y no a la impunidad!** No a al impedimento del deber de memoria!".

Tal es una de las respuestas ciudadanas a la cual es invitada toda la sociedad civil haitiana.

Fuente; Robert Berrouët-Oriol. Rebelión

HONDURAS

HONDURAS, BAJO LA DICTADURA DEL CARTEL ESTADOUNIDENSE DE LA DROGA

En Honduras, después de aquel fatídico golpe de Estado (con la "complicidad silenciosa" del gobierno norteamericano), ya se celebraron dos procesos electorales para el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Donde incluso, en el segundo proceso, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) participó, aunque para ser defraudado. Pero, lejos de la democracia, la *thanatocracia* (gobierno de la muerte) es la que rige en Honduras sembrando el miedo bajo la consigna de: "encierro, o destierro, o entierro a todo opositor".

La comunidad internacional (incluida la CELAC, OEA y UE) y el FNRP, que se oponían a la rústica prepotencia de Roberto Michelletti, se dejaron endilgar por la sonrisa lerda de Pepe Lobo, y aflojaron la resistencia a la dictadura de la muerte vigente en Honduras. Y, allí están las consecuencias. La persecución, el terror y las masacres colectivas arrecian en este país habitado por creciente cantidad de viudas y huérfanos refugiados en las iglesias. Un país donde la Sra. Muerte, personificada en la

astuta mirada photoshop de Juan Orlando Hernández, ya dictó su veredicto final: “Todo opositor tiene que andar confesado”.

La dictadura de la muerte y la sangrienta desintegración social del país es consecuencia del fracaso de la consolidación del Estado soberano. Y ésta condición de Estado fallido es consecuencia, a su vez, del momentáneo triunfo caótico de la permanente intervención norteamericana de “baja intensidad”.

El Sur (CELAC, UNASUR y ALBA) jamás debió dejarse engatusar por el Imperio de la Muerte (EEUU) que actuaba en la malsana sonrisa de Pepe Lobo. Ahora, la propuesta Sur tiene que estar claro que Juan Orlando Hernández es el nuevo rostro del desesperado Imperio herido de la muerte. Una amenaza no sólo para la geopolítica centroamericana, sino para la CELAC y los proyectos de Vida emergentes.

El gobierno de los EEUU no quiere perder el control total del territorio hondureño porque desde allí se garantiza el flujo dinámico regional y continental de la industria del narcotráfico que inyecta ingentes cantidades de dólares frescos al crítico sistema bancario norteamericano.

Sin los dólares del narcotráfico, y sin las ganancias de la industria de las armas que bajan hacia el Sur, la economía yanqui ya hubiese colapsado. Por eso, ahora, el gobierno norteamericano, prácticamente se convirtió en el cartel del narcotráfico más ubicuo y terrorífico en Honduras, que no admite competencia, mucho menos oposición. Los carteles de Sinaloa y Los Zetas, quienes antes se partían como queso el control del territorio hondureño, ahora, al parecer se encuentran bajo el control de este cartel mayor.

Diluir el Estado, espantar a la cooperación internacional y ONGs europeas y canadienses, y escarmentar con asesinatos selectivos a activistas de la resistencia tenía una finalidad. Ahora, es este territorio caótico y sangriento, el cartel norteamericano controla casi la totalidad de las iglesias (evangélicas y católica), no existe más cooperación internacional significativa que USAID en todo el territorio nacional, el sistema electoral y judicial están también controlados por dicho cartel. Lo que ocurrió con las fraudulentas elecciones nacionales pasadas, y la subsiguiente unificación de los dos partidos políticos tradicionales para mantenerse en el gobierno aparente en Honduras es una evidencia más de aquella estrategia narcocriminal del Imperio de la muerte.

Si usted aún duda de esta perversidad, de cómo un Imperio en apuros financieros opera en puntos estratégicos como un cartel de la droga, vea lo que le pasó a la incipiente fuerzas antidroga de Honduras que oficiosamente se atrevió a derribar, en 2012, una narcoavioneta con destino hacia el Norte, sin autorización de la DEA. Ante aquel acto desleal, el gobierno norteamericano retiró su radar antidrogas instalado en la parte nororiente de Honduras y dejó ciego a la comedia Fuerza Aérea de Honduras (FAH), y mandó destituir incluso al entonces jefe de la FAH. En Honduras, los narcomilitares recuperan las confiscadas narcoavionetas para seguir operando.

Hasta hace poco, generalmente los carteles de la industria del narcotráfico operaban con mediana disciplina y “orden”. Sin generar mayor caos sangriento en el territorio. Amigables y paternalistas con los pobladores (construían escuelas, iglesias y centros de salud, pagaban a maestros, pastores/curas y médicos). Ahora, ante la fragmentación y multiplicación de los carteles, éstos pelean violentamente por el control de los territorios. Recurren a la industria del secuestro y el sicariato. Imponen impuestos altísimos a las diferentes actividades económicas locales. Utilizan incluso la mística y la espiritualidad religiosa para someter y legitimarse en las comunidades. Michoacán, México, manifiesta esta evolución de la narcoindustria fragmentaria.

El cartel norteamericano en Honduras actúa de manera inédita: impone a sus secuaces como gobiernos nacionales; define las leyes nacionales mediante sus tramitadores en el Congreso Nacional; financia y promueve el crecimiento de sus iglesias con la finalidad de controlar la mente y la moral de hondureños/as; monopoliza las obras de caridad internacional mediante la USAID; entrega lo poco que queda de los bienes comunes del país a sus subalternos serviles aglutinados en la Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), palos blancos de consorcios multinacionales... Todo esto con la finalidad de tener asegurado el control absoluto y directo del

estratégico territorio hondureño, inigualable pista de aterrizaje y redistribuidor de la inimaginable cantidad de cargamento que fluye hacia el Norte, y de las armas que bajan hacia el Sur.

El pueblo hondureño, y la solidaria comunidad internacional, tiene que estar consciente de esta mutación camaleónica del Imperio de la Muerte. Aquí la pelea no es por la democracia, ni contra el comunismo. Es por el control total del territorio estratégico hondureño para que la industria narcomilitar, libre de impedimentos siga inyectando divisas frescas al debilitado sistema financiero yanqui. Por eso, todo movimiento social o político que plantee la refundación del Estado soberano en Honduras está sentenciado a ser aniquilado.

Ahora, más que nunca, está claro que la lucha antidrogas norteamericano tenía por objetivo convertir al gobierno norteamericano en el cartel de la droga más grande la historia. Por eso los yanquis jamás vencieron ninguna guerra antidrogas en ningún rincón del planeta.

Tomado de <http://otramerica.com>

MÉXICO

INFIERNO EN CHIAPAS PARA L@S MIGRANTES

Es bien sabido que en la ciudad fronteriza de Tapachula, México, las personas migrantes viven un infierno en su paso hacia la frontera con Estados Unidos, son sometidas a todo tipo de explotación laboral y sexual siendo las mujeres las más vulnerables. Miles de desaparecidos, extorsionados, asesinatos que nunca son aclarados y los cuerpos terminan en fosas clandestinas de cementerios locales. Ni autoridades del país de traslado ni del de origen se involucran, quiero decir con esto que los consulados están nada más de adorno.

No es la primera vez que albergues, organizaciones pro migrantes y activistas que defienden los Derechos Humanos, se pronuncian y denuncian la bajeza de las autoridades policiales, gubernamentales y estatales.

El Centro de Dignificación Humana, A.C., no quita el dedo del renglón y pide cuentas a las autoridades por la forma en que manosean, ultrajan y negocian con los derechos humanos de las personas indocumentadas. Se han aliado al crimen organizado. Piden una depuración, investigaciones internas, cárcel para quienes hacen de la justicia una herramienta para la transgresión. Altos mandos del gobierno mexicano están involucrados en la trata de personas. Cuando un organismo internacional exige cuentas, lo que hacen es detener a personas inocentes y les fabrican casos falsos, obligan a otras a acusarlas y con esto mostrar públicamente que hay resultados positivos. –No solo en Tapachula, no solo en México, esto es el mundo entero–.

El Centro de Dignificación Humana, A.C., denunció en noviembre del año 2013 la existencia de como mínimo 15 zonas de tolerancia –que eso de tolerancia hay que desmenuzar el término y cambiar el significado cuando se trata de explotación sexual- en Estado de Chiapas. Son parte del paisaje cotidiano y del entorno social de los habitantes: las cantinas, bares, diurnos y nocturnos, cabarets, table dance, centros nocturnos y botaneros donde se explota a cuanta niña, adolescente y mujer no tenga documentos legales del país. Las por siempre ultrajadas migrantes clandestinas.

Los habitantes del lugar que ya se acostumbraron a vivir con la impunidad, no denuncian la existencia de estos lugares, saben que las autoridades están involucradas, que reciben su cantidad mensual de soborno, que son bien atendidos policías y trabajadores de gobierno a quienes ofrecen las niñas vírgenes en pago por su silencio y cordialidad al tratar estos asuntos oscuros y aceptados como actividad normal en las fronteras del país.

Son las mujeres centroamericanas las ultrajadas y de este selecto grupo las hondureñas las más expuestas a vejámenes, sus carnes voluptuosas son perfectas para la explotación sexual. Así lo dicta el patriarcado: nalgas y tetas.

En el informe del Centro de Dignificación Humana, A.C., denuncia más de tres mil sitios donde se explota sexualmente a niñas, adolescentes y mujeres, en los que se venden bebidas embriagantes y todo tipo de anfetaminas. Entre los sitios hay los muy distinguidos que cuentan con permiso de las

autoridades y también los que operan en la clandestinidad, en ambos el trato a las mujeres es el mismo: mercancía.

...

Según la investigación realizada más de 1,500 mujeres son explotadas laboral y sexualmente en esta zona, la cantidad varía debido a su condición de migrantes, están en constante rotación y movimiento. Guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, en su mayoría éstas últimas.

...

Se trata de organizaciones internacionales que enganchan a las personas desde sus países de origen en los que están involucrados coyotes, taxistas, dueños de hoteles y pensiones, comedores. Después de haber sido rotadas en las casas de citas, las envían a los table dance y posteriormente a los centros botaneros ya con una total dependencia al alcohol o cualquier tipo de droga. Bien sabido es que también laboran en estos centros adolescentes de la localidad que son explotadas por sus padres y son obligadas a prostituirse para ayudar en la economía del hogar.

Nuevamente el 2 de febrero del año en curso el Centro de Dignificación Humana, A.C., junto a otras organizaciones pro migrantes, albergues y activistas defensores de los derechos humanos, han denunciado a las autoridades de la localidad que al verse presionadas por entidades estatales y federales han inculcado a personas inocentes y las han expuesto al escrutinio público. Múltiples casos en que las sacan de los lugares donde son explotadas sexualmente, las torturan y las obligan a testificar una contra otra acusándose entre sí de ser unas las enganchadoras y las más jóvenes las explotadas cuando son todas las explotadas por el sistema, las autoridades corruptas, el crimen organizado. Les fabrican documentos falsos para hacer ver a unas como menores de edad y a otras como mayores. A muchas las han amedrentado quitándoles a sus hijas y obligándolas a testificar lo que ellos les dictan; de lo contrario les avisan que no las volverán a ver.

Todo un juego sucio para demostrar que están realizando el trabajo y que están obteniendo resultados significativos.

Las agredidas por la autoridad policial y gubernamental recurrieron a los albergues para solicitar ayuda, varias de ellas fueron deportadas y otras se encuentran en cárceles pagando condenas por delitos que no han cometido.

Son estas mismas entidades, empleados sobornados que hacen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas un infierno para las niñas, adolescentes y mujeres que son secuestradas, explotadas sexualmente, desaparecidas y asesinadas. Es en los centro de atención al migrante donde más las amedrentan, las manipulan, muchas ahí mismo son abusadas sexualmente por el personal que labora. A muchas las hacen abortar cuando quedan embarazadas por las violaciones. No les brindan la comida que tiene que ser de tres tiempos al día. No les autorizan la leche para sus hijas. No les permiten el acceso a la higiene elemental. Incomunicadas como una forma de intimidación para que hagan lo que ellos quieren.

Tomado de Resumen Latinoamericano/Ilka Oliva

NICARAGUA

COSEP SE RETIRA DE NEGOCIACIÓN

En una clara muestra de respaldo a la empresa privada, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, argumentó que los ajustes salariales deben hacerse en base a la productividad de los sectores.

Y advirtió que mientras en Nicaragua la productividad no se incrementa, será difícil mantener esos "necesarios ajustes al salario". Además, puso de ejemplo que en Costa Rica los trabajadores pedían un ajuste del 4.5 por ciento, pero el Gobierno solo autorizó el 0.47 por ciento.

Arce brindó estas declaraciones el mismo día en que las negociaciones del ajuste a la paga mínima se suspendieron, al retirarse de la mesa de negociación el representante del sector privado.

El retiro de los empresarios fue en rechazo al acuerdo parcial firmado la semana pasada, por los sindicatos y el Gobierno, que establece en diez por ciento el incremento salarial para las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sector, el salario que rige desde septiembre es de 2,855 córdobas.

Los empresarios mantienen su propuesta de incremento en ocho por ciento para ese sector y reiteran que el ajuste para el resto de actividades económicas se mantenga en un dígito.

Tomado de <http://www.laprensa.com.ni/>

PANAMÁ

LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN Y LA SOLUCIÓN

En su discurso ante la Asamblea Nacional de Diputados el 1º de julio de 2013, el presidente Ricardo Martinelli declaró que “si no transformamos la educación pública, no estaremos en condiciones de acompañar y fortalecer el proceso de crecimiento (económico) que vivimos”. Para lograr este objetivo, señaló que gobierno identificó dos objetivos básicos. El primero es garantizar una educación incluyente. Es decir, asegurar que todos los niños ingresen al sistema y que no lo abandonen. El segundo, elevar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles.

En su Congreso anual, la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE) examinó estos planteamientos y llegó a la conclusión que el gobierno había fracasado en ambos casos. La deserción escolar sigue aumentando y la calidad de la educación continua empeorando. En un documento de trabajo del Congreso, se comparó la situación de la educación en 2008 con la de 2012. La cobertura de la población en edad escolar sufrió una baja. Mientras que en 2008 el 85.1 por ciento de los niños estaban en las escuelas, en 2012 la cifra bajo a sólo 84.7 por ciento. Todavía más alarmante, trabajando con cifras preliminares de 2013, se constató que en 2013 la tendencia siguió su curso. Según estimaciones, la población en edad escolar de ese año fue 992.574. Los informes sobre la matrícula inicial de 2013 indican que hubo 55,540 menos niños matriculados. Sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Educación, la tasa de escolarización en 2013 sólo alcanzó el 78.8 por ciento.

Según el documento discutido en el Congreso de AEVE, “la cobertura escolar en 2013 cayó de manera preocupante”. Dado el aumento de la población en edad escolar y el descenso sensitivo de las matrículas en los niveles primario y pre media en 2013 es presumible que la cobertura escolar disminuyó. “Es claro que durante este gobierno la inclusión (cobertura) no solo no aumentó, sino que en 2013 hizo crisis.

Con relación al segundo objetivo del gobierno, que es ‘elevar la calidad de la enseñanza en todos los niveles’, los indicadores oficiales revelan que este objetivo tampoco fue cumplido. Por ejemplo, Mientras que en 2008 había 5,056 docentes no calificados en el sistema, en 2012 la cifra se elevó a 5,097 docentes. Para la AEVE es preocupante que el 53 por ciento de los docentes del nivel preescolar no está calificado. No se cumple con uno de los objetivos de su existencia, que es resolver algunos de los problemas que se presentan en el primer grado.

Otro serio problema que incide sobre la educación es la existencia y promoción de las escuelas rancho o ‘multigrado’. En 2012, de las 2,971 escuelas oficiales del nivel primario en Panamá, el 71.4 por ciento eran escuelas multigrado. Las escuelas rancho se concentran en las áreas rurales (81.4 por ciento). En las áreas urbanas el 4.4 por ciento de las escuelas son multigrado.

El 23.3 por ciento, es decir, uno de cada cuatro, estudiantes están matriculados en escuelas multigrado primarias oficiales. En las áreas rural e indígena, 4 de cada 10 niños matriculados están asistiendo a escuelas de modalidad multigrado.

Esta modalidad, se ha extendido rápidamente, bajo el actual gobierno, a las escuelas de pre-media. El sistema escuelas rancho pasó de 33.5 por ciento en 2010 a 45.7 por ciento en 2012. En 2012 habían 279 escuelas oficiales de pre-media multigrado de un total de 610 escuelas de pre media

oficiales del país. La matrícula en estas escuelas es de 11,812 estudiantes que representan el 7.4 por ciento del total en las escuelas oficiales.

En el Congreso de la AEVER, el candidato independiente a presidente de la República, Juan Jované, presentó su plan de trabajo en materia de educación preparado para cuando sea gobierno. Lo primero, es “reconocer el derecho a la educación, como un derecho humano inalienable”. Para ese fin hay que “revertir todas las medidas existentes que hayan llevado a la tercerización y privatización en la esfera de los servicios de educación”. Casi todos los días el Ministerio de Educación pública resoluciones que tienden a socavar los cimientos del sistema escolar que se comenzó a construir hace cien años. La semana pasada anunció que había decidido eliminar el bachillerato en Letras, erradicando cursos de Educación Física, Historia y Cívica.

Jované también se comprometió a establecer a nivel constitucional un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado para la educación. En la actualidad, el gobierno destina a la educación el 3 por ciento de su presupuesto. Esta suma debe elevarse al 12 por ciento si se quiere erradicar los problemas sociales del país. Sólo este fin de semana se celebraron bodas, cumpleaños y otras fiestas en la ciudad de Panamá que superaron los presupuestos de la mitad de las escuelas oficiales del país.

El candidato independiente también señaló que crearía un Instituto de la Juventud y garantizaría el derecho a la libre organización de los estudiantes en todos los planteles del país. Restablecería dentro del programa académico obligatorio la asignatura de “Historia de las relaciones de Panamá y EEUU”. También aseguró que eliminaría todas las escuelas multigrado que discrimina a los más pobres.

Tomado de <http://alainet.org/>

PUERTO RICO

CRISIS DE ENDEUDAMIENTO CON SABOR CARIBEÑO

La historia sobre como la isla llego a esta situación es relativamente sencilla. En su condición de territorio ocupado por los Estados Unidos, Puerto Rico disfruta de una serie de beneficios y exenciones fiscales los cuales son sumamente atractivos para inversionistas norteamericanos. A pesar de no ser considerado legalmente como un Estado de la Unión, los bonos de deuda de Puerto Rico reciben el mismo trato legal que los bonos de deuda de ciudades y Estados de los Estados Unidos. Con el propósito de facilitar el financiamiento a nivel territorial en condiciones preferenciales respecto al resto del mercado, el interés de estos bonos esta excepto del pago de impuestos.

En este sentido, la diferencia clave entre Puerto Rico y los gobiernos estatales radica en las tasas de interés que pagan. Por ejemplo, mientras que un Estado con problemas fiscales como California emite deuda con una tasa de interés de 2,37%, Puerto Rico emite deuda a tasas entre 8 y 10%. En un entorno caracterizado por bajas tasas de interés a nivel global, este tipo de rendimientos resulto sumamente atractivo para los inversionistas. A esto se sumaron dos beneficios adicionales. Primero, de acuerdo a las leyes de Puerto Rico, el pago de intereses recibe prioridad en los pagos realizados por el gobierno. Segundo, existía el supuesto implícito que en caso de problemas, el gobierno de Puerto Rico contaba con el respaldo del gobierno federal de los Estados Unidos. Gracias a estas características, los mercados vieron en la isla una buena y segura oportunidad para aumentar sus beneficios.

Desde la perspectiva de Puerto Rico, la disponibilidad de financiamiento externo permitió enmascarar temporalmente sus problemas fiscales postergando así la toma de decisiones difíciles para la economía. Entre los años 2007 y 2012 la economía se contrajo año tras año. La reducción en el tamaño de la economía afecto de manera negativa el recaudo tributario, y con ello las necesidades de financiamiento del gobierno. En su peor momento el déficit fiscal del gobierno llego a representar el 6% del PIB en el 2009. Este peligroso equilibrio perduro hasta el año 2013.

En julio de dicho año, la declaración de bancarrota de la ciudad de Detroit lo cambio todo. La confianza de los inversionistas sobre la seguridad de los bonos de estados y municipalidades se

desvaneció. Cuando los mercados empezaron a deshacerse en masa de los bonos de deuda de Puerto Rico, la deuda de la isla ya alcanzaba los 70.000 millones de dólares (102% del PIB). Debido a la incapacidad de Puerto Rico de emitir nuevos bonos desde julio de 2013, dicho país se ha visto forzado a recurrir a financiamiento de corto plazo por parte de bancos quienes cobran tasas de interés aun mas altas debido al riesgo de default. Esto solo ha agravado los problemas del país y aumentado las dudas respecto a su capacidad para superar la crisis sin un default y posterior reestructuración de su deuda.

Ante esta difícil situación, la gobernación de Puerto Rico ha presentado la implementación de medidas de austeridad como una solución original e innovadora para salir de la crisis. Como era de esperarse, la austeridad en su versión caribeña no difiere mucho de su versión europea. Dándole prioridad al pago de la deuda, la gobernación decidió congelar el pago de pensiones públicas y aumentar las tarifas tanto de los impuestos como de los servicios públicos. Debido al impacto negativo de estas medidas sobre las perspectivas futuras de la economía, los mercados mantienen una posición escéptica respecto a la viabilidad fiscal de Puerto Rico. Esto ha aumentado los rumores respecto a la necesidad de una intervención directa para rescatar al territorio por parte del gobierno federal y coordinada por el Congreso de los Estados Unidos.

Mientras los inversionistas se mantienen a la espera, los puertorriqueños sufren las consecuencias de la austeridad. La tasa de desempleo alcanza un 15% y se estima que el 45% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El 50% de los habitantes reciben algún tipo de ayuda del gobierno federal. Ante esta difícil situación mas y mas personas deciden emigrar hacia los Estados Unidos. Se estima que en los últimos 5 años alrededor de 65.000 personas han emigrado anualmente en busca de mejores oportunidades en el continente. La población que se queda atrás es de mayor edad y menores calificaciones lo que proyecta una oscura sombra sobre el futuro de la isla.

Para concluir, es necesario señalar que difícilmente el país podrá encontrar una solución a sus problemas en el marco de la lógica de los mercados financieros. En el caso específico de esta isla es necesario entonces llamar la atención que sobre la relación entre soberanía y obligaciones de pago. Es posible argumentar que debido al carácter de territorio ocupado de Puerto Rico, su deuda tiene un carácter claramente ilegítimo. Por esta razón, el pueblo puertorriqueño no tiene la obligación de pagarla. De forma irónica, los Estados Unidos establecieron este principio legal con otra isla caribeña en 1898. Tras la guerra de independencia de Cuba, los Estados Unidos argumentaron que debido a su status como colonia, esta isla no estaba en la obligación de pagar sus deudas con España. Sería un bello giro del destino que los oprimidos utilizaran los mismos argumentos de sus opresores para cancelar sus deudas. En este sentido, la lucha por un Puerto Rico libre e independiente, tanto de la deuda como de la ocupación de los Estados Unidos, en realidad representa una sola justa lucha.

Fuente: Daniel Munevar. CADTM

EL IMPERIALISMO APRIETA LAS TUERCAS

Con las recientes movidas de la S&P y Moody's de degradar la calificación crediticia del gobierno colonial, el imperialismo aprieta las tuercas a la sociedad puertorriqueña en general y la clase obrera en particular. El acto en sí solamente profundiza un proceso en marcha hace tiempo ya que los bonos emitidos por el gobierno colonial tenían durante varios años rendimientos comparables con los de una calificación "chatarra" y las medidas de austeridad impuestas por el estado colonial, precisamente con el pretexto de la necesidad de evadir la baja en la calificación, se iban implementando de forma continua bajo varias administraciones.

Mientras que los políticos de turno y sus acólitos debaten públicamente si la degradación crediticia fue producto de la "inmadurez" de administraciones coloniales anteriores o una "traición" de parte de las agencias de calificación crediticia, la realidad que intentan obscurecer con su retórica es que *todo* el aparato político colonial sirve para la sistemática apropiación y extensión del control de riquezas por el capital, particularmente el capital financiero. El papel del estado colonial como facilitador de la penetración del capital financiero se ve claramente desde las cláusulas

constitucionales y las determinaciones jurídicas a las políticas de los tres partidos que colaboran en la administración estatal.

Las consecuencias inmediatas para la clase obrera puertorriqueña serán adicionales despidos en masa de trabajadores estatales, privatizaciones de agencias públicas, alzas en los costos de servicios públicos esenciales además de recortes en otros como ya se ha propuesto para la ACT. Para la sociedad en general se espera una intensificación del éxodo hacia fuera y el deterioro de toda la infraestructura social.

En cuanto a la deuda pública, la degradación desatará una serie de mecanismos contractuales que facilitan una mayor transferencia de ingresos tributarios a los bancos internacionales debido a los términos de los acuerdos de “swaps” de tasas de interés los cuales imponen sanciones por las degradaciones crediticias y permiten que las contrapartes, los grandes bancos internacionales y fondos de cobertura, aceleren el servicio de la deuda. En el más reciente informe de Nuveen Asset Management, se resume el impacto de estos contratos de la siguiente manera:

“La rebaja por debajo del grado de inversión podría resultar en adicionales presiones de liquidez de aproximadamente \$1 billón para cubrir los costos del servicio de deuda acelerado además de los requisitos de fijaciones de garantías adicionales asociados con las obligaciones de los contratos de “swaps”. Aproximadamente \$575 millones de la deuda emitida por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) está sujeta a la aceleración. La S & P informa que el ELA está negociando actualmente con contrapartes para perdonar las provisiones de la aceleración. Unas fijaciones de garantías adicionales serán requeridas para las obligaciones generales, además de las de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la ACT para un total de \$1 mil millones.”

La decisión de la S&P y Moody's pone de relieve otra vez más el verdadero papel que desempeñan a servicio del capital financiero. En esta conexión es importante recordar que lo que ha pasado con Puerto Rico no es un acontecimiento aislado sino forma parte de una reciente ola de degradaciones municipales a través de EE.UU. que incluye Chicago, Phoenix, por lo menos 31 municipios en el estado de Minnesota y 24 en el estado de New Jersey para nombrar solo algunos lugares duramente abatidos. El carácter nefario de estas agencias y todo el sistema calificación crediticia, repleto de corrupción, ha llegado a un extremo aún para los políticos liberales que se han propuesto una enmienda para abordar conflictos de interés. En cada uno de los casos mencionados arriba es a la clase obrera que se le impone la carga de la degradación crediticia en la forma de medidas de austeridad mientras que el saqueo de los cofres tributarios por el capital financiero con la bendición de los políticos sigue sin frenos.

La increíble desigualdad que engendra el capitalismo, que fue destacada recientemente en el informe de OXFAM, prueba aún más que las contradicciones fundamentales del capitalismo no pueden resolverse, salvo por un derrocamiento revolucionario del orden burgués. Cuando los portavoces políticos de la burguesía hablan de una recuperación económica, de lo que están hablando realmente es una intensificación de la acumulación de riquezas por la clase dominante. La realidad permanente para la inmensa mayoría de proletarios consiste en el trabajo inestable si no el desempleo, los salarios estancados y el creciente endeudamiento. La profundidad de la crisis del capitalismo en el mundo colonial fue descrito recientemente en un artículo de primera plana del *New York Times* en el que se puso de relieve la situación invivible de Puerto Rico. De manera típica, los portavoces liberales de la burguesía no pudieron ofrecer una salida a la crisis.

Para el movimiento revolucionario en Puerto Rico la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad nos impone aún más el deber histórico de organizar nuestras fuerzas. Si la lucha de clases es el motor de la historia sólo conducirá hacia el progreso humano mediante la organización revolucionaria. Es por eso que de todos los aspectos de la crisis que aflige Puerto Rico en la actualidad, el más importante puede resumirse como una *crisis de dirección revolucionaria*.

Fuente: Carlos Borrero. Rebelión

VENEZUELA

LA LEY ORGÁNICA DE PRECIO JUSTO EN VENEZUELA. EL ANÁLISIS DE JAMES PETRAS

Transcribimos el análisis radial de James Petras del lunes 10 de febrero que usted puede volver a escuchar completo aquí: http://www.ivoox.com/columna-james-petras-espanol-cx36-audios-mp3_rf_2818891_1.html

HV: Otro de los temas que queríamos consultarle, es respecto a la guerra que lleva adelante el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra la especulación y el acaparamiento. Hoy vence el plazo para que los comerciantes de todo el país se ajusten a la Ley Orgánica de Precio Justo que entró en vigencia el 23 de enero. Incluso esta Ley contiene fuertes sanciones a quienes la infrinjan. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?

JP: Hay varios puntos.

Mucho depende de la administración del reglamento de la normativa, porque una vez que uno aprueba un cambio de este alcance necesita un ejército de administradores y representantes capaces de ingresar a los comercios para ver si cumplen con la misma. En segundo lugar, una vez que se los sanciona, tiene que verse con los Juzgados Administrativos que sanciones y multas van a aplicar.

Entonces, simplemente anunciar nuevas leyes es una cosa y la otra es la implementación y su aplicación.

Pero más allá de eso constantemente va a ser un problema porque los capitalistas pueden utilizar muchos mecanismos para evitar la aplicación, por ejemplo poner distintos nombre o distinto producto con menor diferencia y decir que a ese producto no se aplica, etc. Entonces habría que ir a un proceso judicial para ver qué productos deben estar o no incluidos en la lista de precios controlados.

En tercer lugar es imprescindible la participación de los consumidores, de las organizaciones vecinales, para que sirvan para notificar a los oficiales que a su vez deben tomar las denuncias y verificarlas. Lo que también es un problema para la estructura estatal.

Por tanto, es un paso positivo pero mucho depende de cómo se implementa y de qué nivel de participación tienen los afectados, los consumidores, en la implementación.

En todo caso el problema a largo plazo es que en Venezuela se empiecen a montar industrias en las que el Estado está directamente involucrado, porque la regulación tiene su aspecto positivo pero siempre vas a encontrar una oposición y por ejemplo los comerciantes pueden tomar la medida de dejar de vender ciertos productos para evitar la regulación, lo que va a provocar la falta de productos. No habrá ni de precios controlados ni de precios descontrolados.

Al final de cuentas, la solución es socializar en mayor forma y con mejor efectividad y eficiencia, esos sectores afectados.

HV: ¿Lo ideal sería que el gobierno tome las riendas de la producción y de la comercialización de los productos?

JP: En el grado que fuera, porque una cosa es que el Estado tome el control y otra bien distinta que lo haga funcionando con eficiencia, porque de lo contrario no tiene sentido.

Entonces la regulación es un paso transitorio pero necesario para tratar que todos los bienes estén disponibles para los consumidores.

Héctor Vicente - Radio CX36 centenario

A VUELTAS CON EL GOLPISMO EN VENEZUELA

Pensamos, quizá con ingenuidad, que con el triunfo del Presidente Maduro en las últimas elecciones, donde sacó más de diez puntos de ventaja a los candidatos de la Mesa de la Unidad, la situación en Venezuela iba a tranquilizarse. Capriles, el candidato derrotado en las presidenciales y electo en el estado de Miranda, acudió el último diciembre a una reunión del Presidente con los

cargos públicos locales y estatales recién elegidos. Reconoció la victoria de Maduro y también su legitimidad. Pero ahí comenzó también la fragmentación entre las filas de la derecha.

El escenario de una parte no menor de la derecha latinoamericana siempre ha sido el del golpismo cuando han estado fuera del gobierno, y la represión de cualquier disidencia o alternativa cuando habitan los palacios presidenciales. De esa actitud, alimentada por los Estados Unidos -para quien todo al sur del Río Bravo es su "patio trasero"-, surgió también como respuesta la lucha armada. El fin del gobierno sandinista en 1990 marcó el fin de las salidas violentas desde la izquierda. Fracasó el primer levantamiento zapatista (triunfó el pacífico y mediático), fracasó Chávez en 1992, fracasó Sendero Luminoso, se estancaron las FARC... Chávez lo entendió y en 1998 se hizo con el gobierno cambiando los fusiles por las urnas. Pero participar en las elecciones no iba a apaciguar a la derecha.

Desde el primer momento, Chávez se convirtió en el enemigo de los derrotados (ya para esas elecciones de 1998, Aznar mandó a Moragas, Arriola y, qué casualidad, a Correa -el de la Gürtel- a ayudar en las elecciones a la candidata de la derecha). Pero al igual que el hundimiento de la URSS en 1991 fue el comienzo del fin del Estado social en Europa, la renuncia a la lucha armada en América Latina vino acompañada el recrudecimiento del golpismo en la derecha del continente. La derecha sólo acepta la democracia si está en el poder. Cuando está fuera, le vale todo para recuperarlo. En casi todos lados. ¿O no nos acordamos que Aznar llegó a la política mintiendo y se fue mintiendo?

La extrema derecha venezolana vuelve a las andadas. No está dispuesta a esperar que la coyuntura les de una oportunidad electoral. Siempre tienen prisa. Capriles ya no les vale y vuelven al sabotaje, a poner muertos en las calles, a la desestabilización, contando como única baza el apoyo mercenario de buena parte de las empresas de medios de comunicación del mundo y de la propia Venezuela (donde el 80% de los medios están en manos de la oposición). Como su candidato, Capriles, ganó en diciembre en las elecciones en el estado de Miranda y ha aceptado el resultado (no parece muy sensato decir que hay fraude cuando tú mismo has sido elegido), los candidatos de los Estados Unidos vuelven a agitar la bandera de la violencia para intentar acorralar al gobierno de Nicolás Maduro. Los mismos que ya probaron esa estrategia en el breve golpe de 2002. Los mismos que si se hicieran con el poder en Venezuela convertirían el país en un cementerio anexo a una cárcel.

Los análisis de una parte de la derecha son los que han llevado a un sector de la misma, que siguen sin querer entender el apoyo popular al proceso bolivariano, a repetir la estrategia golpista. Ramón Piñango, del IESA y director de la "Unidad de análisis de coyuntura", recomendaba recientemente a Henrique Capriles alejarse de Leopoldo López y de su plan de regresar a la lucha callejera para desestabilizar al gobierno (Plan "Salida"). En un documento publicado estos días en la prensa venezolana hacía las siguientes reflexiones, entendiendo que la anterior estrategia golpista sólo había servido para reforzar más el apoyo popular al chavismo: "1. El respaldo popular al Chavismo sigue siendo importante y mayoritario; 2. Las medidas anunciadas por el Presidente Maduro han dado señales para el pueblo que el Gobierno esta actuando; 3. El Gobierno ha logrado posicionar la matriz de la responsabilidad del sector privado en la escasez y especulación; 4. Los vínculos de Leopoldo Lopez con Alvaro Uribe y el paramilitarismo quiebra la relación con el Gobierno de Santos; 5. El respaldo de las Fuerzas Armadas a la revolución es irrestricto; 6. La agenda del Plan "Salida" no tiene ni tendrá respaldo popular, el pueblo de Venezuela por tradición cultural aísla a los violentos; 7. Cualquier acción violenta contra el Gobierno unifica las fuerzas Chavistas; 8. La agenda de Leopoldo López no se corresponde con asuntos de política nacional; 9. Las acciones de Leopoldo López buscan desplazar el liderazgo de Capriles".

La prensa internacional ha vuelto a ser cómplice de la enésima intentona golpista. Por una parte, los que manejan una idea ramplona de justicia y reparten culpas desde la tentación de la inocencia. Son los que hablan de "los dos bandos" o de los "extremistas de ambos lados", como si fuera lo mismo estar en el Gobierno que ser un golpista. Por otra -los más-, formando directamente parte de la estrategia golpista y acusando al Gobierno de Maduro de ilegítimo. Ya vamos sabiendo que para la prensa europea eso de ganar las elecciones es una estupidez cuando no las ganan sus patrones

(¿nos acordamos de Papademos en Grecia y de Monti en Italia? ¿Y de Rajoy asumiendo que le dan lo mismo los compromisos electorales que le llevaron a la Presidencia del Gobierno?).

Las acusaciones vertidas sobre el gobierno bolivariano apenas se sostienen cuando se conoce la realidad del país. La derecha golpista venezolana está armada, está vinculada con el paramilitarismo colombiano y siempre tiene como estrategia sembrar la calle de muertos para intentar estrechar el cerco contra el gobierno. Como ocurrió en 2002, vuelven a conocerse conversaciones previas donde ya se anunciaba que las manifestaciones iban a terminar con muertos -denunciadas por el Presidente Maduro- o aparecen, como en tantas otras ocasiones, mercenarios contratados para generar desórdenes. Por el contrario, otros vídeos demuestran cómo la policía bolivariana tiene un comportamiento bien diferente del que vemos en otros países, incluido España. Sin olvidar que uno de los tres muertos era un militante chavista (cualquier muerto, sea cual fuere su signo, merece compasión). Pero esas informaciones no aparecen en los medios: no sirven para criminalizar a Venezuela.

Claro que existen grupos populares en el país caribeño con capacidad de resistir un golpe de Estado (como ocurrió en España en julio de 1936). Ya quisiera la derecha golpista que no existieran. Y están además los 100.000 kalashnikov que Chávez compró para armar a las milicias bolivarianas. En América Latina saben que los golpes de Estado organizados desde Estados Unidos son parte de la política del continente. Quien quiera entrar por la fuerza en Venezuela, va a encontrarse con mucho pueblo enfrente. Tienen además -y eso no lo soporta la derecha- unas fuerzas armadas comprometidas con su misión de salvaguardar al pueblo y no a los latifundistas y a los grandes empresarios. Tendremos que ver qué pasaría en Europa si una fuerza política como Syriza gana las elecciones en Grecia. En la América del Sur han aprendido sus lecciones. Allende no murió en vano.

En Venezuela no hay enfrentamiento entre dos bandos ni choques entre "hordas". Hay un Gobierno legítimo y una minoría que no está dispuesta a dejarle gobernar. Claro que en Venezuela hay serios problemas económicos (¿recordamos que hay una crisis mundial?), no menos serios problemas de seguridad (vinculados a un complejo entramado de causas donde no es la menor un modelo de consumo que te hace creer que si a los 15 años no tienes ya todo eres un perdedor) y problemas igualmente graves de gestión administrativa (donde la corrupción endémica del país sigue siendo una asignatura pendiente pese a los arduos intentos del Gobierno por atajarla). La condición petrolera del país genera problemas estructurales contra los que aún no se ha encontrado una solución eficaz, pero de nada ayuda la permanente espada de Damocles del golpismo para enfrentar los problemas pendientes. No estaría de más que los amigos del golpismo y de las revoluciones de colores sacaran sus sucias manos de Venezuela y dejaran al Gobierno gobernar. No es sencillo hacerlo cuando un gobierno poderoso está siempre poniendo palos en las ruedas (¿nos acordamos en España de las dificultades añadidas en la lucha contra la violencia de ETA por la actitud beligerante de Francia?). Sin justificaciones como las que brindan los violentos, la vía electoral para que la oposición ofrezca al país su alternativa se hace más clara conforme los errores del gobierno allanen el camino de sus oponentes. Pero no en un escenario de amenaza golpista.

En las últimas elecciones presidenciales, y aprovechando que Chávez ya no era el candidato, la oposición estuvo a punto de volver al Gobierno. La tarea de la oposición debiera centrarse en señalar las deficiencias de la gestión de Maduro e ir preparando un modelo de país alternativo que convenza a las mayorías. Capriles lo ha entendido y por eso se ha desmarcado de la vía violenta. Otros, como Leopoldo López o María Corina Machado, quieren sacar a Capriles de juego y ocupar su lugar con una estrategia de confrontación soñando con un escenario libio o sirio para Venezuela. Porque el ruido que se hace con Venezuela siempre tiene que ver con lo mismo: su condición de país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Una codiciada pieza. Por eso fueron ayer contra Chávez y van hoy contra Maduro. Que Venezuela esté en los telediarios no tiene nada que ver con la violencia. Tiene que ver con que tienen petróleo y no son obedientes a los mandatos del norte.

Junto a esa lucha internacional sempiterna por controlar el petróleo venezolano, otra parte muy importante de los disturbios que acaban de tener lugar en el país tiene que ver con las pugnas internas dentro de la oposición venezolana. Sería importante que todo el país fuera consciente de que esos que quieren gobernar en Venezuela para sustituir al chavismo no le hacen ascos a que

compatriotas suyos dejen la vida en los enfrentamientos. Porque para esa derecha golpista de Venezuela, como la de otros tantos sitios, su única patria siempre es el propio interés. Su democracia es una pantalla. Y del mismo modo que celebraron el reciente golpe en Honduras o los constantes intentos de derribar por la fuerza a Cristina Fernández, a Evo Morales o a Correa , su triunfo sería regresar a Venezuela a una oscura noche de la que, entonces sí, no nos hablarían los medios de comunicación. El pueblo de Venezuela ha dado su apoyo a Maduro. Y la obligación de cualquier demócrata es hacer valer su legitimidad frente a cualquier agresión golpista como la que ahora mismo está sufriendo. Aunque la presión mediática haga difícil esa tarea. Los enemigos de la democracia no cesan en su empeño. Que no nos venzan por cansancio.

Juan Carlos Monedero